

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 72 de diciembre de 2020.

VISTO:

Los artículos 124 y 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 1903, y 2451, la Resoluciones FG Nros. 100/2011, 428/2012, 501/2012, 444/2013, 233/2014, 168/2017, 132/2016, 6/2016, 530/2018, 276/2019, 15/2020, 20/2020, 73/2020 y 109/2020, el Informe SGPCyA N° 4/2020 y la Actuación Interna N° 30-00066149 del Sistema Electrónico de Gestión Administrativa de esta Fiscalía General, y

CONSIDERANDO:

-I-

Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que el Ministerio Público tiene entre sus funciones las de "promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad" y "velar por la normal prestación del servicio de justicia y procurar ante los tribunales la satisfacción del interés social" (artículo 125).

Que, particularmente, en ejercicio de las facultades que le son propias y como titular de uno de los ámbitos que componen el Ministerio Público, la Ley Nº 1903 establece que corresponde al Fiscal General realizar las reasignaciones del personal de acuerdo con las necesidades del servicio y fijar normas generales para la distribución del trabajo del Ministerio Público Fiscal (artículo 22, inc. 6 y artículo 31, inc. 4).

Que, en este sentido, la Fiscalía General ha conformado en los últimos años equipos especializados para la investigación de distintos delitos y contravenciones, contando en la actualidad con fiscalías y/o unidades que concentran la intervención en fenómenos vinculados con la protección del medio ambiente (cf. Resolución FG Nº 6/2016); la violencia de género (cf. Resoluciones FG Nros. 100/2011 y 168/2017); las conductas discriminatorias (cf. Resolución FG Nº 132/2016); los delitos de lesiones leves culposas ocasionadas en accidentes de tránsito y las contravenciones de tránsito (cf. Resolución FG Nº 530/2018); las violaciones de clausura (cf. Resolución FG Nº 276/2019); las infracciones al régimen de faltas (cf. Resolución FG Nº 428/2012); los delitos y contravenciones relacionadas con espectáculos artísticos y/o deportivos de carácter masivo (cf. Resolución FG Nº 15/2020); los delitos y contravenciones informáticas (cf. Resoluciones FG Nros. 501/2012, 444/2013, 233/2014 y 20/2020); los delitos tributarios (cf. Resolución FG Nº 73/2020) y los delitos vinculados con estupefacientes (cf. Resolución FG Nº 109/2020).



Que los Tratados Internacionales de Derechos Humanos incorporados a la Constitución Nacional (artículo 75, inc. 22) reconocen a los niños, niñas y adolescentes como sujetos especialmente protegidos; y requieren que todas las dependencias estatales adopten una perspectiva particular de la infancia en el desarrollo de su labor cotidiana. En el sistema de justicia penal, ese mandato se pone de manifiesto en el llamado principio de especialidad en el tratamiento de los casos que den lugar a una imputación en su contra.

Que, en términos generales, la Convención sobre los Derechos del Niño obliga a los Estados parte a priorizar dentro de sus políticas públicas a niños y niñas, brindándoles especial atención y protección, y garantizando el ejercicio pleno de sus derechos. En particular, esta Convención dispone que las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, tienen la obligación de atender al interés superior del niño como consideración primordial en la adopción de cualquier medida que los involucre (artículo 3, inc. 1).

Que la entrada en vigor de la Convención en el Derecho argentino significó un cambio de paradigma en materia penal juvenil. En efecto, el nuevo marco precipitó el abandono de la doctrina de la llamada "situación irregular", que implicaba "2020. Año del General Manuel Belgrano" una aproximación al fenómeno desproporcionadamente tutelar o asistencialista, y la correlativa consolidación de la doctrina de la "protección integral", según la cual los niños, niñas y adolescentes se consideran titulares plenos de los derechos humanos de alcance general, así como de aquellos que les corresponden precisamente por su condición de personas en tránsito hacia la edad adulta.

Que, en lo que aquí es de interés, la Convención mencionada dispone que los Estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales, o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes (artículo 40, tercer párrafo).

Que, por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que "cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento" (artículo 5.5).

Que, a su vez, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prescribe que "en el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se tendrá en cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su readaptación social" (artículo 14.4).

Que esta especialidad es una derivación necesaria de la obligación general de los Estados de atender de forma diferenciada los asuntos que atañen a los niños, particularmente los relacionados con su conducta ilícita. En concreto, ello se traduce en



la regulación de un procedimiento especial y en el establecimiento de órganos jurisdiccionales especializados para el conocimiento de los hechos que se les atribuyen.

Que, sobre esta cuestión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que "una consecuencia evidente de la pertinencia de atender en forma diferenciada y específica las cuestiones referentes a los niños, y particularmente, las relacionadas con la conducta ilícita, es el establecimiento de órganos jurisdiccionales especializados para el conocimiento de conductas penalmente típicas atribuidas a aquéllos". En el mismo pronunciamiento, el Tribunal regional aludió al artículo 40 de la Convención de los Derechos del Niño y añadió que "los menores de 18 años a quienes se atribuya la comisión de conductas previstas como delictuosas por la ley penal, deberán quedar sujetos, para los fines del conocimiento respectivo y la adopción de las medidas pertinentes, sólo a órganos jurisdiccionales específicos distintos de los correspondientes a los mayores de edad" (Opinión Consultiva OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Capítulo IX Procedimientos judiciales o administrativos en que participan los niños, Imputabilidad, delincuencia y estado de riesgo, párrafo 109).

Que, posteriormente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ratificó el principio de especialidad en materia penal juvenil, tanto en el procedimiento como en la magistratura competente. Y aclaró que "los que ejerzan dichas facultades deberán estar específicamente preparados y capacitados en los derechos humanos del niño y la psicología infantil para evitar cualquier abuso de la discrecionalidad y para asegurar que las medidas ordenadas en cada caso sean idóneas y proporcionales" ("Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay", sentencia del 2 de septiembre de 2004, párr. 210 y ss.).

Que el Comité de los Derechos del Niño, en su carácter de órgano responsable de la Convención, puntualizó que "el sistema amplio de justicia de niños y adolescentes requiere la implementación de unidades especializadas en la policía, la judicatura, el sistema judicial y la fiscalía, y la disponibilidad de defensores especializados u otros representantes encargados de prestar al menor asistencia jurídica u otra asistencia adecuada". A continuación, recomendó a los Estados parte que "establezcan tribunales de niños, niñas y adolescentes como entidades separadas o como parte de los tribunales regionales o de distrito existentes". Y sostuvo que cuando ello no sea posible en lo inmediato por motivos prácticos, los signatarios "velarán por que se nombre a jueces o magistrados especializados de niños, niñas y adolescentes" (Observación General Nº 10 (2007), Los derechos del niño en la justicia de menores, Capítulo V, La organización de la justicia de menores, párrafo 92 y s.).

Que el principio de especialidad ha sido también recogido en las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la administración de justicia de menores, conocidas



como "Reglas de Beijing". Así, mientras la Regla 1.6 estipula que "los servicios de justicia de menores se perfeccionarán y coordinarán sistemáticamente con miras a elevar y mantener la competencia de sus funcionarios, e incluso los métodos, enfoques y actitudes adoptados", la Regla 2.3 requiere leyes e instituciones específicas para estos supuestos; y las Reglas 6 y 22 consignan la necesidad de asegurar el profesionalismo y la capacitación especializada de quienes se desempeñen en el sistema de justicia juvenil.

Que la aplicación del principio en cuestión no se limita al ámbito sustantivo y procesal del Derecho Penal, sino que también cobra especial relevancia en el ámbito de ejecución o cumplimiento de las sanciones. La pena en estos supuestos debe imponerse con parámetros y criterios diferentes de los correspondientes a los adultos, orientados no tanto en la gravedad del hecho, sino más bien en las condiciones especiales de las personas condenadas.

-III-

Que, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el principio de especialidad está previsto en la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños,

Niñas y Adolescentes (Ley Nº 114), que hace suyas expresamente las ya mencionadas Reglas de Beijing (artículo 12).

Que, asimismo, el Régimen Procesal Penal Juvenil de la Ciudad (Ley Nº 2451) recoge los principios y garantías consagrados en los distintos instrumentos internacionales citados. En particular, la regulación procesal consagra la especialidad de los magistrados en materia penal juvenil (artículo 11) y prescribe que, hasta tanto sean creados los juzgados, fiscalías y defensorías con competencia específica en esa materia, la competencia corresponderá a los actuales integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (cf. disposición transitoria).

Que, en cuanto al Ministerio Público Fiscal, la ley procesal penal juvenil presupone la existencia de un "Fiscal Penal Juvenil" (cf. artículos 10, 14, 31, 36, 38, 47, 49, 51, 58, 59, 61, 71, 75, 76, 78, 79, 82 y cláusula transitoria), lo que da cuenta del imperativo de propender a la especialización en la materia.

Que, a su vez, el artículo 42, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad (Ley N° 7) dispone que "tres (3) de los treinta y un (31) Juzgados de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas impartirán justicia en materia penal juvenil hasta tanto se constituya la Justicia en lo Penal Juvenil".

Que, en consonancia con ello, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad estableció la competencia de los Juzgados de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 3 y 11 para intervenir en materia penal juvenil, en los términos del artículo 42 de la Ley Nº 7 (cf. resolución CM Nº 93/2014). Como



complemento de esa decisión, se creó una nueva Secretaría en cada uno de esos Juzgados (cf. resolución de Presidencia 689/2014), para atender los casos referidos a esta materia y para garantizar que el juez competente en la investigación preparatoria no intervenga en la audiencia de juicio (artículo 32 de la Ley N° 2451). Posteriormente, se estableció que el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 7 ejerciera conjuntamente con los ya designados la competencia en materia penal juvenil, en idénticos términos legales (cf. resolución de Presidencia 746/2019).

-IV-

Que, a fin de contar con información precisa y actualizada en torno a la temática, se encomendó a la Secretaría de Información, Estadística y Análisis de Datos, dependiente de la Secretaría General de Política Criminal y Asistencia a la Víctima, que elaborara un informe respecto de los casos penales ingresados durante el año 2019, en los que resultaron imputados niños, niñas y adolescentes (cf. informe del 23 de junio de 2020, que obra como Anexo a la presente resolución).

Que, específicamente, dicho informe consigna que en ese año se registraron 562 casos penales que involucraban preliminarmente como responsables a

643 niños, niñas y adolescentes. En 469 de los 562 casos, según se indica, los imputados tenían al momento del hecho entre 16 y 18 años de edad; en los 93 casos restantes, en cambio, los niños, niñas y adolescentes involucrados no alcanzaban los 16 años.

Que del total de s casos en los que los imputados alcanzaban la edad mínima de imputabilidad establecida en el Derecho argentino, sólo 60 dieron lugar a una imputación en función de la pena en expectativa prevista para el delito respectivo (artículos 1° y 2° de la Ley N° 22.278). El 50 % de los casos que pasaron el umbral de la imputabilidad (30) correspondió a delitos vinculados a estupefacientes (Ley N° 23.737).

Que, de acuerdo con los datos suministrados, la carga de trabajo promedio permitiría, en principio, centralizar la totalidad de los casos que conforman la materia penal juvenil en el ámbito de la Ciudad en una única Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas.

-V-

Que, de conformidad con el principio de especialidad, el Ministerio Público Fiscal debe adecuar su organización y contribuir al desarrollo progresivo de un sistema de justicia penal diferenciado en materia penal juvenil en el ámbito del Poder Judicial de la Ciudad.

Que, con ese propósito, habré de asignar a una fiscalía, a partir del 1° de marzo de 2021, la competencia exclusiva en toda la Ciudad respecto de aquellos casos



en los que resulten imputados niños, niñas y adolescentes, esto es, personas que no hubieran alcanzado los 18 años de edad al momento del hecho objeto de investigación.

Que, más precisamente, la fiscalía especializada se ocupará de los casos que involucren a niños, niñas o adolescentes imputados prima facie como autores, coautores o partícipes de un delito cuya pena en expectativa se ajuste a los parámetros de la Ley Nacional N° 22.278. En ese marco, la intervención de esa dependencia comprenderá los delitos cuya competencia ya ha sido transferida —o habrá de transferirse— al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, así como las figuras penales que habilitarían el ejercicio de la acción penal en función de la doctrina elaborada por el Tribunal Superior de Justicia en el precedente "Giordano" (cf. expte. N° 16368/19, sentencia del 25 de octubre de 2019).

Que la fiscalía especializada ajustará su desempeño a los principios consolidados del derecho internacional de los derechos humanos en esta materia y promoverá un uso extendido de las soluciones alternativas previstas en los Títulos VIII y IX del Régimen Procesal Penal Juvenil. En cualquiera de esas variantes, el Ministerio Público Fiscal propiciará una política criminal basada en evidencia, que tomará en cuenta las investigaciones más recientes en materia de justicia restaurativa, procedimental y terapéutica.

Que, en una primera etapa, se exceptuará de la competencia exclusiva la gestión inicial de los casos originados en situaciones de flagrancia que den lugar a la detención de niños, niñas y adolescentes. En esos casos, la intervención directa de la fiscalía especializada comenzará luego de la intimación de la persona imputada (artículos 45 de la Ley N° 2451 y 161 del Código Procesal Penal) y de la adopción de las medidas cautelares que se estimaren pertinentes (artículos 49 y 50 de la Ley N° 2451).

Que, en consecuencia, el trámite inicial correspondiente a la flagrancia continuará a cargo de las fiscalías de primera instancia en lo penal, contravencional y de faltas en turno, las que, concretamente, se ocuparán de: (i) evacuar las consultas telefónicas provenientes de las fuerzas de seguridad; (ii) dar aviso al Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad y al Ministerio Público Tutelar; (iii) disponer las demás medidas habituales en relación con el niño, la niña o adolescente aprehendido/a, (iv) practicar la intimación del hecho,;y (v) adoptar y solicitar las medidas cautelares que estimen procedentes. Una vez culminada esta labor, las fiscalías de turno remitirán el caso de inmediato a la fiscalía especializada, a cuyo cargo quedará la decisión sobre la eventual aplicación de soluciones alternativas o, en su defecto, la prosecución de la investigación.

Que las fiscalías de turno corroborarán la edad de la persona imputada y establecerán la subsunción preliminar de los hechos considerando las previsiones de la Ley N° 22.278. Si persistieren dudas en torno a estas cuestiones luego de la intimación del hecho, la fiscalía de turno remitirá de todas maneras el caso a la fiscalía



especializada, que efectuará las diligencias necesarias para confirmar o rechazar su intervención (cfr. artículo 3 de la Ley N° 2451).

Que las fiscalías de competencia general deberán continuar con la tramitación de las denuncias y actuaciones de prevención iniciadas con anterioridad al 1° de marzo de 2021, no obstante lo cual la fiscalía especializada podrá reclamar su competencia por casos iniciados con anterioridad a esa fecha invocando, de manera fundada, razones de conexidad.

Que, sin perjuicio de lo dicho hasta aquí, a los efectos de brindar un panorama completo de la situación organizacional, cabe destacar que se encuentra en proceso de elaboración el proyecto para implementar la Unidad Fiscal de Flagrancia. Según la planificación efectuada, la nueva dependencia absorberá de manera exclusiva la intervención inicial de todos los casos detectados en situación de flagrancia.

Que la competencia exclusiva en materia penal juvenil, con las aclaraciones efectuadas precedentemente, se encomendará a la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 4, a cargo del Dr. Mauro Andrés Tereszko. Ello, no obstante, la dependencia continuará como parte del sistema de turnos de la Unidad Fiscal Norte, e intervendrá en el conocimiento de los casos que le resulten asignados

conforme las reglas generales de atribución existentes (cf. criterio adoptado en la resolución FG Nº 15/2020).

Que el principio de especialidad en materia penal juvenil demanda asimismo centralizar la intervención institucional en segunda instancia, razón por la cual habré de asignar la competencia exclusiva en estos procesos a la Titular de la Fiscalía de Cámara Especializada en Faltas, Contravenciones de Tránsito y Lesiones Culposas de Tránsito, Dra. Sandra Verónica Guagnino. A partir de la vigencia de la presente resolución, esta dependencia pasará a denominarse Fiscalía de Cámara Especializada en lo Penal, Contravencional y de Faltas.

Que la labor asignada a la Sra. Fiscal de Cámara comprenderá la revisión de archivos, la actuación ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, la prórroga de las investigaciones preparatorias, la resolución de contiendas de competencias entre la fiscalía especializada y el resto de las Fiscalías del Fuero, así como las demás intervenciones previstas en la legislación procesal y en la ley orgánica del Ministerio Público.

Que la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 4 conservará su asiento en Av. Cabildo 3067, piso 4, de esta Ciudad. Los trámites de corte administrativo que la Fiscalía realice en el marco de su competencia penal juvenil serán diligenciados por la Unidad de Tramitación Común de la Unidad Fiscal Norte, emplazada en la misma locación.



-VI-

Que, en cumplimiento de los estándares internacionales, es menester que los agentes del Ministerio Público Fiscal abocados a esta temática continúen adquiriendo conocimientos jurídicos específicos y que, además, complementen su formación profesional con contenidos referidos a otras disciplinas que se consideran fundamentales para un trabajo adecuado con niños, niñas y adolescentes.

Que, en virtud de lo precedentemete señalado, , habré de encomendar a la Secretaría de Relaciones Institucionales que, en coordinación con la Secretaría General de Política Criminal y Asistencia a la Víctima, profundice el plan integral de capacitación en la materia que se viene llevando a cabo respecto de magistrados, funcionarios y empleados.

Que, asimismo, habré de solicitar a la Oficina de Recursos Humanos y a la Fiscalía General Adjunta en lo Penal y Contravencional, que formulen conjuntamente una propuesta sobre el personal que se estime necesario para afrontar la carga de trabajo que insumirá la gestión de los casos objeto de especialización, tomando en cuenta para ello su formación y capacitación en esta materia.

Que, por otra parte, corresponde requerir a la Secretaría de Coordinación Administrativa que, a través del área correspondiente, realice los cambios necesarios en el sistema electrónico de gestión KIWI a fin de ajustarlo a lo que aquí se ha de resolver.

Que, habiéndosele dado intervención al Departamento de Asuntos Jurídicos, no opuso reparos a la suscripción del presente acto administrativo.

Por ello, y de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los artículos 22, inciso 6 y 31, inciso 4 de la Ley N° 1903,

EL FISCAL GENERAL DE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Asignar a la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 4, a cargo del Dr. Mauro Andrés Tereszko, la competencia especial en todo el ámbito territorial de la Ciudad de Buenos Aires para intervenir en casos en los que resulten imputados niños, niñas y adolescentes que no hayan alcanzado los 18 años de edad al momento del hecho, a partir del 1º de marzo de 2021, de conformidad con las consideraciones efectuadas en el acápite V de la presente resolución.



ARTÍCULO 2º. - Exceptuar de la competencia material asignada en el artículo 1º de la presente resolución la gestión inicial de la flagrancia, que continuará a cargo de las fiscalías de primera instancia en lo penal, contravencional y de faltas en turno. Dichas dependencias se ocuparán de: (i) evacuar las consultas telefónicas provenientes de las fuerzas de seguridad; (ii) dar aviso al Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad y al Ministerio Público Tutelar; (iii) disponer las demás medidas habituales en relación con el niño, niña o adolescente aprehendido, (iv) practicar la intimación del hecho y (v) adoptar y solicitar las medidas cautelares que estimen procedentes. Una vez culminada esta labor, las fiscalías de turno remitirán el caso de inmediato a la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 4.

ARTÍCULO 3º.- Disponer que la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 4 mantenga bajo su órbita la competencia general ejercida hasta el momento, su participación dentro del sistema de turnos y la intervención en los casos que le resulten asignados conforme a las reglas generales de atribución.

ARTÍCULO 4°.- Establecer que, si al momento de la intimación del hecho existieren dudas sobre la edad de la persona imputada, los fiscales de turno deberán remitir el "2020. Año del General Manuel Belgrano"

caso de todas maneras al fiscal especializado, que efectuará las diligencias necesarias para confirmar o rechazar su intervención (artículo 3 de la Ley N° 2451).

ARTICULO 5°.- Asignar a la Fiscalía de Cámara Especializada en Faltas, Contravenciones de Tránsito y Lesiones Culposas de Tránsito, a cargo de la Dra. Sandra Verónica Guagnino, la competencia exclusiva ante la segunda instancia respecto de los casos que forman parte de la especialización definida en el artículo 1°, de conformidad con las precisiones efectuadas en el acápite V de la presente resolución.

Artículo 6°.- Disponer que la Fiscalía de Cámara Especializada en Faltas, Contravenciones de Tránsito y Lesiones Culposas de Tránsito se denomine Fiscalía de Cámara Especializada en lo Penal, Contravencional y de Faltas.

ARTICULO 7º.- Establecer que la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 4 conservará su asiento en Av. Cabildo 3067, piso 4, de esta Gudad, y que los trámites de corte administrativo que se realicen en el marco de su competencia penal juvenil serán diligenciados por la Unidad de Tramitación Común de la Unidad Fiscal Norte, emplazada en la misma locación.

ARTÍCULO 8°.- Encomendar a la Secretaría General de Relaciones Institucionales que, en coordinación con la Secretaría General de Política Criminal y Asistencia a la Víctima, profundice el plan integral de capacitación en la materia que se viene llevando a cabo respecto de magistrados, funcionarios y empleados.

ARTÍCULO 9°.- Incorporar como anexo de la presente el informe de fecha 23 de junio de 2020, elaborado por la Secretaría de Información, Estadística y Análisis de



Datos, dependiente de la Secretaría General de Política Criminal y Asistencia a la Víctima.

ARTÍCULO 10.- Solicitar a la Oficina de Recursos Humanos y a la Fiscalía General Adjunta en lo Penal y Contravencional, que formulen conjuntamente una propuesta sobre los recursos humanos que se estimen necesarios para afrontar la carga de trabajo que insumirá la gestión de los casos objeto de especialización.

ARTÍCULO 11. - Requerir a la Secretaría de Coordinación Administrativa que, a través del área correspondiente, realice los cambios necesarios en el sistema electrónico de gestión KIWI a fin de ajustarlo a lo aquí resuelto.

ARTÍCULO 12.- Regístrese; publíquese en la página de internet del Ministerio Público Fiscal; notifíquese a los interesados; comuníquese a todos los señores Fiscales y Secretarios Generales del Ministerio Público Fiscal, a la Sra. Presidente del Tribunal Superior de Justicia, al Sr. Presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, al Sr. Presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas -y, por su intermedio, a sus integrantes y a los señores Jueces de Primera Instancia del fuero-, al Sr. Defensor General, a la Sra. Asesora General Tutelar, al Presidente de la Legislatura, al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y a los Sres. Jefes de la Policía de la Ciudad de Buenos "2020. Año del General Manuel Belgrano"

Aires, de la Policía Federal Argentina, de la Prefectura Naval Argentina y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria,

Cumplido, archívese.

RESOLUCIÓN FG Nº 178/2020.-

Juan Bautista Mahiques Fiscal General Ciudad Autónoma de Buenos Alres



ANEXO I - RESOLUCIÓN FG Nº J29/2020

SECRETARÍA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ANÁLISIS DE DATOS

CASOS PENALES INGRESADOS EN EL AÑO 2019 CON MENORES IMPUTADOS.





INTRODUCCIÓN

El presente informe se elabora en virtud de la solicitud efectuada por la Secretaría General de Política Criminal y Asistencia a la Víctima el 16 de junio de 2020, mediante la cual se requirióun análisis sobre las investigaciones penales iniciadas en el año 2019 con menores de edad involucrados en calidad de imputados.

En dicho marco, concretamente se solicitó que se precisara:

- A) La estadística de ingresos por denuncias formuladas contra menores de edad, siempre que la escala penal del delito involucrado se ajuste a las previsiones de la ley N° 22.278.
- B) A tenor de los resultados que arroje el punto precedente, los casos MPF en los que hubiesen resultado formalmente intimados menores de edad.

Con el propósito de propiciar una mayor claridad expositiva y un recto entendimiento de la información aquí suministrada, corresponde realizar una serie de notas aclaratorias con respecto a la metodología de trabajo aplicaday los criterios de relevamiento utilizados pararecabarlosdatos reflejados en estedocumento.

A tal fin, cabe precisar que:

- Por un lado, se procedió a relevar del sistema KIWI la totalidad de las investigaciones penales conpersonas físicasimputadas/denunciadas en el año 2019, cuya edad o fecha de nacimientofuese conocida. Una vez determinado aquel universo, se estableció cuáles de esas personas resultabanmenores de 18 años de edad al momento de intimárselesla comisión de un hecho delictivo. De este modo, se pudo extraer y delimitar unprimer sub-universo de estudio.
- 2) Por otra parte, también se procuró complementar esos datos y obtener un segundo sub-universo a partir de la etiqueta "menores si/no" del sistema KIWI, la cual permite a sus operadores indicar en los registros la presencia de sujetos menores involucrados en las investigaciones penales. Así, la utilizaciónde aquel filtropermitió realizar una compulsa refinada y ajustada a dicho criterio; obteniéndose

una cifra que arrojaba la totalidad de las investigaciones penales iniciadas en el año 2019 con menores de edad implicados.

Ahora bien, cabe señalar que ese resultado debió a su vez ser sometido a una revisión integral a efectos de limitarlo sólo a aquellos casos en los cuales los menores se encontraban ligados al proceso en calidad de imputados. Ello así, por cuanto la etiqueta aludida solo advierte sobre la presencia de menores en el proceso, pero no brinda mayores precisiones respecto a la calidad en la cual se encuentran involucrados (es decir, si son imputados, víctimas o denunciantes).

 Culminadosambos procesamientos, se procedió a contrastar rigurosamente sus resultados, a fin de depurar y unificar los datos en una base.

En la práctica, ello significó consultar en el sistema KIWI cada caso de formamanual y minuciosa; lo cual permitió verificarfehacientementela presencia de menores de edad en calidad de imputados, al tiempo que posibilitó detectardos situaciones puntuales que correspondeadvertir, a saber:

 a) En una cantidad considerable de casos se observaronmodificaciones respecto de lascalificacioneslegales asignadasal inicio de las investigaciones.

Respecto de ello, deviene oportuno poner de relieve que a los efectos del presente análisislas calificaciones consideradas son aquellas surgidas del decreto dedeterminación de los hechos -Art. 92 del CPPCABA-, momento en el cual se fija el objeto procesal de la investigación.

 b) Una porción sustancial de casos que a priori parecían involucrar menores en calidad de imputados;en rigor asociaban sujetos menores de edad como víctimas o denunciantes.

Esto último se advirtió principalmente en las investigaciones seguidas por el delito previsto en el artículo 128 del Código Penal (delitos atinentes a la pornografía infantil); en virtud de lo cualno serán considerados a los efectos del presente análisis.

Realizadas las aclaraciones pertinentes, el informe estadístico contiene la siguiente información procesada:

 a) Casos penales ingresados con presencia de menores de edad en calidad imputados, según delitos.

¹Esto da cuenta de que este nuevo análisis es más exhaustivo y riguroso si se lo compara con el Informe OANel N° 341/20 del 9/03/2020, titulado "Informe Estadístico sobre Casos Penales Ingresados al MPF con imputados menores de edad durante el año 2019", por cuanto se procedió a desarrollar un estudio caso por caso.



- b) Casos penales ingresados con presencia de menores de edad en calidad de imputados, según edad.
- c) Casos penales ingresados con presencia de menores de edad en calidad de imputados, según punibilidad.
- d) Casos penales ingresados con presencia de menores punibles según los términos del art. 2 del Régimen Penal de la Minoridad.
- e) Casos penales ingresados con presencia de menores no punibles según los términos del Art. 1, 1º párrafo del Régimen Penal de la Minoridad.
- f) Casos penales ingresados con presencia de menores punibles según intimación del hecho -Art. 161 CPPCABA-.

Resta precisar, que la fuente de información utilizada en miras de cumplir con lo solicitado por el área requirente es el sistema de registro de datos "KIWI".

CASOS PENALES CON MENORES DE EDAD EN CALIDAD DE IMPUTADOS. AÑO 2019

La Tabla Nº 1 refleja la cantidad total de casospenales iniciados en el año 2019 con presencia de menores de edad en calidad de imputados, según las conductas delictivas investigadas.

Tabla N' 1: Año 2019 - Casos penales ingresados con presencia de menores de edad en calidad de imputados, según delitos

Conductas delictivas	Descripción	Total
89	Lesiones leves	131
89 y 149 bis 1º párrafo	Lesiones leves y amenazas simples	14
89 y 149 ter inc. 1	Lesiones leves y amenazas coactivas	-1-
89 y 150	Lesiones leves y violación de domicilio	11_
89 y 183	Lesiones leves y daños	2
89 y 237	Lesiones leves y atentado a la autoridad	1
89 y 239	Lesiones leves y resistencia o desobediencia a la autoridad	2
89 y 92	Lesiones leves agravadas	2
89, 149 bis 1º párrafo y 183	Lesiones leves, amenazas simples y daños	2
89, 149 bis 1º párrafo y 237	Lesiones leves y amenazas simples y atentado a la autoridad	11
89, 184 inc. 4, 184 inc. 5, 238 inc. 2 y 239	Lesiones leves, daños agravados amenazas simples, atentado a la autoridad agravado	1
89, 238 inc. 4 y Ley 23.737 Art. 14 (1º parrafo)	Lesiones leves, atentado a la autoridad agravado y tenencia de estupefacientes	1
89, 92 y 149 bis 1º parrafo	Lesiones leves agravadas y amenazas simples	- 5
89, 92, 149 bis 1º párrafo, 164 y 239	Lesiones leves agravadas, amenazas simples, robo y resistencia y desobediencia a la autoridad	1
89, 92 y 237	Lesiones leves agravadas y atentado a la autoridad	1
90	Lesiones graves	1
90 y 183	Lesiones graves y daños	111
90, 149 bis 1° párrafo y 189 bis inc. 2 (4° pá. rafo)	Lesiones graves, amenazas simples y portación de arma de guerra sin autorización	1
94	Lesiones culposas	13
94 v 94 bis	Lesiones por conducción imprudente	1
95	Lesiones en riña	1
96	Lesiones en riña leves	9
104	Abuso de arma.	1
238 inc. 1	Atentado contra la autoridad agravado por el uso de armas	
104, 149 bis 1° párrafo y 183	Abuso de arma, amenazas simples y daños	7.1
104, 189 bis inc. 2 (4° párrafo) y 239	Abuso de arma, portación de arma de guerra sin autorización y resistencia a desobediencia a la autoridad	Ø
128 1 pårr	Delitos Atinentes a la Pornografia	3
129 1 pårr	Exhibiciones Obscenas	2
149 bis 1º párrafo,	Amenazas simples	57
149 bis 1º párrafo y 183	Amenazas simples y daños	1
149 ter inc. 1 y 183	Amenazas coactivas y daños	1
149 bis 1° párrafo y Ley 23.737 Art. 5 inc. c)	Amenazas simples y comercio de estupefacientes	1
149 ter inc. 1	Amenazas coactivas agravadas por el uso de armas o por ser anónimas	2
150	Violación de domicilio	6
150 y 183	Violación de domicilio y daños	- ST
181 inc. 1	Usurpación (Despojo)	- 4



TO THE REPORT OF THE PARTY.	Total	562
Pr	esunto Delito	2
Ley 23,737 Art. 5 inc. c)	Comercio de estupefacientes	10
Ley 23.737 Art. 14 (2º párrafo)	Tenencia de estupefacientes atenuada por ser para uso personal	181
Ley 23.737 Art. 14 (1º párrafo)	Tenencia de estupefacientes	23
275	Falso testimonio	1
243	Desobediencia a cargas procesales	1
239 y Ley 23.737 Art. 14 (2° párrafo)	Resistencia o desobediencia a la autoridad y tenencia de estupefacientes	1
239	Resistencia o desobediencia a la autoridad	16
238 inc. 4 y Ley 23.737 Art. 14 (1° párrafo)	Atentado contra la autoridad agravado por poner las manos en la autoridad y tenencia de estupefacientes	1
238 inc. 4	Atentado contra la autoridad agravado por poner las manos en la autoridad	5
237	Atentado contra la autoridad	3
193 bis	Prueba ilegal de velocidad	1
189 bis Inc. 2 párrafo 3	Portación de arma de fuego de uso civil	4
189 bis Inc. 2 párrafo 1	Tenencia de arma de fuego de uso civil	6
189 bis inc. 2 (4º parrafo)	Portación de arma de guerra sin autorización	1
189 bis inc. 2 (2º párrafo)	Tenencia simple de arma de guerra sin autorización	- 6
184 inc. 1	Daños agravados	1
183 y 239	Daños y resistencia o desobediencia a la autoridad	1_
183	Daños	26

En otro orden, cabe añadir que si bien la tabla no aporta mayores precisiones respecto a la cantidad de menores involucrados en las investigaciones penales señaladas, se pudo establecer queresultaron ser un totalde 643 personas².

Tabla Nº 2: Casos penales ingresados con presencia de menores de edad en calidad de imputados, según edad.

Casos ingresados según edad de los menores involucrados	Cantidad	Porcentaje
Con menores que no alcanzan los 16 años	93	16,5%
Con menores entre 16 y 18 años	469	83,5%
Total	562	100%

²Esto es así por cuanto en muchos de los hechos denunciadosy perseguidos, más de un menor de edad resulta implicado. Para mayor detalle sobre las investigaciones con múltiples menores imputados, se sugiere ver la tabla que se incorpora como Anexo al presente informe.

La tabla N° 2 considera la cantidad total de casos penales con presencia de menores en calidad de imputados según su rango etario; esto es, sialcanzan o no los 16 (dieciséis)años de edad.

Esta distinción responde a que la ley N° 22.278 establece consecuencias diferentes para cada uno de esos dos supuestos³. En efecto, si bien el Régimen Penal de la Minoridad establece como presupuestonecesario de atribución de responsabilidad penal que el menor involucrado haya alcanzado los 16 (dieciséis) años de edad; tal circunstancia no resulta suficiente. De ahí que, aquellos 469 casos con menores de entre 16 y 18 años debieron tamizarse a la luz de lo prescripto en los arts. 1, 1° párrafo y 2 dela Ley N° 22.278, en tanto allí se establece que tampoco es punible, quien "no haya cumplido dieciocho (18) años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos (2) años, con multa o con inhabilitación"; mientras que sí lo es el menor de dieciséis (16) años a dieciocho (18) años de edad que incurriere en algún delito que no fuera de los enunciados en el artículo 1 del régimen penal de menores.

Tabla N' 3: Casos penales ingresados con presencia de menores de edad en calidad de imputadosentre 16 y 18 años de edad, según punibilidad.

Casos ingresados con menores de edad con 16 años cumplidos según punibilidad -Ley 22.278-	Cantidad	Porcentaje
No punioles, en razón del Art. 1, 1º párrafo, 2º supuesto Ley 22.278	409	87,2%
Punibles según el Art. 2 Ley 22.278	60	12,8%
Total	469	100%

La Tabla Nº 3 alude estrictamenteal sub-universo de 469 casos penales ingresados con presencia de menores entre 16 y 18 años de edad, detallando:

-Casosajustados a las previsiones del art. 1,1° párrafo(donde los menores no resultan punibles por cuanto se les imputa delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no excedelos dos (2) años, con multa o con inhabilitación).

³Ley N° 22.278 en su art. 1°, 1er, párr. establece que "No es punible el menor que no haya cumplido dieciséis (16) años. Tampoco lo es el que no haya cumplido dieciocho (18) años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos (2) años, con muita o con inhabilitación".



 Casos encuadrablesen el art. 2 de la Ley N° 22.278 (en los cuales el menor si puede ser perseguido al imputárseledelitos de acción pública, o reprimidos con pena privativa de la libertad mayor a los 2 (dos) años).

Tabla N' 4: Casos penales ingresados con presencia de menores (que alcanzan los 16 años de edad)encuadrables en los términos del art. 2 del Régimen Penal de la Minoridad, según delito imputado.

Conductas delictivas	Descripción	Total
149 ter inc. 1	Amenazas coactivas	1
/ 184 inc. 5	Daños agravados	1
164	Robo	1
90	Lesiones graves	1
90 y 183	Lesiones graves y daños	1
90, 149 bis 1º párrafo y 189 bis inc. 2 (4º párrafo)	Lesiones graves, amenazas simples y portación de arma de guerra sin autorización	1)
94 y 94 bis	Lesiones por conducción imprudente	1
95	Lesiones en riña	1
104	Abuso de arma	1
104, 149 bis 1º párrafo y 183	Abuso de arma, amenazas simples y daños	1
128 1 párr	Delitos Atinentes a la Pornografía	3
149 ter inc. 1 y 183	Amenazas coactivas y daños	1
149 bis 1° párrafo y Ley 23.737 Art, 5 inc. c)	Amenazas simples y comercio de estupefacientes	1
150 y 183	Violación de domicilio y daños	1
181 inc. 1	Usurpación (Despojo)	1
189 bis inc. 2 (2º párrafo)	Tenencia simple de arma de guerra sin autorización	4
189 bis inc. 2 (4º párrafo)	Portación de arma de guerra sin autorización	1
189 bis Inc. 2 párrafo 1 y Ley 23.737 Art. 5 inc. c)	Tenencia de arma de fuego de uso civil y comercio de estupefacientes	1
189 bis Inc. 2 párrafo 3	Portación de arma de fuego de uso civil	4
193 bis	Prueba ilegal de velocidad	1
238 inc. 4 y Ley 23,737 Art. 14 (1º párrafo)	Atentado contra la autoridad agravado por poner las manos en la autoridad y tenencia de estupefacientes	1
275	Falso testimonio	-71
Ley 23.737 Art. 14 (1º párrafo)	Tenencia de estupefacientes	20
Ley 23.737 Art. 5 Inc. c)	Comercio de estupefacientes	10

Total 60

La tabla N° 4, muestra los casos penales con presencia de menores (cuya edad alcanza los 16 años)encuadrables en el art. 2 de la Ley N° 22.278,según las conductas delictivas perseguidas.

Tabla N' 5: Casos penales ingresados con presencia de menores(que alcanzan los 16 años de edad)encuadrables en los términos del Art. 1, 1' párrafo, segundo supuesto del Régimen Penal de la Minoridad, según delito.

Descripción	Total
Lesiones leves	110
Lesiones leves y amenazas simples	8
Lesiones leves, amenazas simples y daños	31
Lesiones leves y violación de domicilio	(4
Lesiones leves y daños	<u> </u>
Lesiones leves y atentado a la autoridad	ā
Lesiones leves y resistencia o desobediencia a la autoridad	2
Lesiones leves agravadas	2
Lesiones leves agravadas y amenazas simples	4
Lesiones graves	9
Atentado contra la autoridad agravado por el uso de armas	4 0
Amenazas simples	50
Abuso de arma, amenazas simples y daños	1
Violación de domicillo	4
Daños	18
Daños y resistencia o desobediencia a la autoridad	-1
Tenencia de arma de fuego de uso civil	6
Atentado contra la autoridad	3
Atentado contra la autoridad agravado por poner las manos en la autoridad	5
Resistencia o desobediencia a la autoridad	16
Resistencia o desobediencia a la autoridad y tenencia de estupefacientes	17
Desobediencia a cargas procesales	1
Tenencia de estupefacientes atenuada por ser para uso personal	161
nto Delito	2
	Lesiones leves y amenazas simples Lesiones leves, amenazas simples y daños Lesiones leves y violación de domicilio Lesiones leves y daños Lesiones leves y atentado a la autoridad Lesiones leves y resistencia o desobediencia a la autoridad Lesiones leves agravadas Lesiones leves agravadas Lesiones leves agravadas Lesiones leves agravadas y amenazas simples Lesiones graves Atentado contra la autoridad agravado por el uso de armas Amenazas simples Abuso de arma, amenazas simples y daños Violación de domicillo Daños Daños y resistencia o desobediencia a la autoridad Tenencia de arma de fuego de uso civil Atentado contra la autoridad agravado por poner las manos en la autoridad Resistencia o desobediencia a la autoridad y tenencia de estupefacientes Desobediencia a cargas procesales Tenencia de estupefacientes atenuada por ser para uso personal



Por su parte, la tabla N° 5 refleja los casos penales con presencia de menores de edad que a pesar de haber alcanzado los 16 años,no resultan puniblesdada la calificación legal de los hechos delictivos y de su escala punitiva.

Tabla N' 6: Casos penales ingresados con presencia de menores punibles según intimación del hecho -Art. 161 CPPCABA-.

Legajos¹	Intimación de hecho (Art. 161 CPPCABA)	Cantidad	Porcentaje
MPF00346351, MPF00255948, MPF00286434, MPF00323307, MPF00367388, MPF00302452, MPF00364923, MPF00372778, MPF00273892, MPF00375569, MPF00266037, MPF00255910, MPF00256716, MPF00257054, MPF00262179, MPF00271073, MPF00276857, MPF00286681, MPF00286792, MPF00287663 (2 imputados), MPF00323273, MPF00340515, MPF00341875, MPF00355905, MPF00374922, MPF00380856, MPF00381487, MPF00384053, MPF00387097, MPF00265007 (2 imputados), MPF00387192, MPF00367597 y MPF00397803	SI	33	55%
MPF00272965 (3 imputados), MPF00397967 (2 imputados), MPF00371179, MPF00388602, MPF00392655, MPF00345101, MPF00282089, MPF00315025 (2 imputados), MPF00400769, MPF00326864, MPF00392091, MPF00316303, MPF00371256, MPF00349745 (6 imputados), MPF00330117, MPF00296983, MPF00385904, MPF00408449 (2 imputados), MPF00286787, MPF00458769 (2 imputados), MPF00405888, MPF00310715 (2 imputados), MPF00315781, MPF00319614, MPF003333394, MPF00342085 y MPF00377381	NO	27	45%
Total		60	100%

Por último, la tabla Nº 6 aborda exclusivamente el sub-universo de 60 casos donde los menores de edad involucrados podrían ser penalmente responsables respecto de las conductas delictivas investigadas, en razón de lo dispuesto enel art. 2 del Régimen Penal de la Minoridad.

⁴En ambas investigaciones con múltiples menores en calidad de imputados-MPF00265007 y MPF00287663-, todos fueron intimados en los términos del art. 161 del CPPCABA.

Dicho sub-universopermite establecer en qué cantidad de casos se intimó formalmente a los menores, en los términos del art 161 del CPPCABA.



ANEXO

Total	E.	41	_	2	-	2	2	2	=
Delitos	89	89 y 149 bis 1º párrafo	89 y 149 ter Inc. 1	89 y 183	89 y 237	89 y 239	89 y 92	89, 149 bis 1º párrafo y 183	89, 149 bis 1º párrafo y 237
Legajos	MPF00259936, MPF00261420, MPF00266226, MPF00267513, MPF00280352, MPF00282191, MPF00282166, MPF00283164, MPF00283104, MPF00283803, MPF002883104, MPF002888917, MPF002888917, MPF002888917, MPF002888917, MPF002888917, MPF002888917, MPF002888917, MPF002888917, MPF00288992, MPF002903861, MPF00289361, MPF00298898, MPF00298304, MPF00298891, MPF0039029, MPF0039034, MPF00390304, MPF00390304, MPF00390304, MPF00390304, MPF00390304, MPF00390304, MPF00390304, MPF003303037, MPF003303791, MPF003303791, MPF003303791, MPF003303791, MPF00330303, MPF003333397, MPF0033333397, MPF003333397, MPF003333399, MPF003333397, MPF003333399, MPF003333397, MPF003333397, MPF003333397, MPF003333397, MPF003333397, MPF003333397, MPF003333397, MPF003333397, MPF003333399, MPF00333339, MPF00333239, MPF00333239, MPF00333239, MPF00333239, MPF00333239, MPF00333239, MPF00333339, MPF00333239, MPF0	MPF00258351, MPF00261564, MPF00300316, MPF00300677 (3 Imputados), MPF00364502, MPF00318072, MPF00326789, MPF00345804, MPF00352376 (2 Imputados), MPF00356661, MPF00363244, MPF00363926, MPF0036612, MPF0036363244, MPF0036399120 y MPF00413987	MPF00371256	MPF00336353 y MPF00340203	MPF00304501	MPF00300240 y MPF00397810	MPF00225554 y MPF00381467	MPF00382420 y MPF00286521	MPF00285045 (2 imputados)

"2020. Año del General Manuel Belgrano"

-	1	el la	5	=	-		æ	₹	13			6	-	-		m	2	25	1	5	7	2	9	-	
89 y 150	89, 184 inc. 4, 184 inc. 5, 238 inc. 2 y 239	89, 238 inc. 4 y Ley 23.737 Art. 14 (1° párrafo)	89, 92 y 149 bis 1° párrafo	89, 92, 149 bis 1º párrafo, 164 y 239	89, 92 y 237	06	90 y 183	90, 149 bis 1° párrafo y 189 bis inc. 2 (4° párrafo)	94	94 y 94 bis	95	96	104	104, 149 bis 1º párrafo y 183	104, 189 bis inc. 2 (4° párrafo) y 239	128 1 párr	129 l párr	149 bis 1º pārrafo	149 bis 1° párrafo y 183	149 ter inc. 1 y 183	149 bis 1º párrafo y Ley 23.737 Art. S inc.	149 ter inc. 1	150	150 y 183	181 inc. 1
MPF-00288811	MPF00349745 (6 imputados)	MPF00330117	MPF00337315, MPF00371825, MPF00400357, MPF00264445 y MPF00400367	MPF00296983	MPF00258517	MPF00385904	MPF00408449 (2 imputados)	MPE00286787	MPF00279612, MPF00288795, MPF00305593, MPF00309350, MPF00315938, MPF00327800, MPF00330264, MPF0035327800, MPF003373962, MPF00363734885, MPF00380714, MPF00382530 y MPF00413493 (2 imputados)	MPF00266037	MPF00458769 (2 imputados)	MPF00283443, MPF00283478, MPF00291538 (3 Imputados), MPF00317309, MPF00346875, MPF00350526 (2 Imputados), MPF00366333 (4 Imputados), MPF00396953 y MPF00418977	MPF00272965 (3 imputados)	MPF00392967 (2 imputados)	MPF00290629	MPF00371179, MPF00388602 y MPF00392655	MPF00291717 y MPF00395487	MPF00262677, MPF00265571, MPF00223713, MPF00275402, MPF0027342 (2 Imputados), MPF00265534 (2 Imputados), MPF00265571, MPF00291215, MPF0029673, MPF00294958, MPF00295593, MPF00297855, MPF00303688, MPF0031688, MPF00316372, MPF0031672, MPF00401893, MPF00401893, MPF0040187, MPF00401892, MPF0040187, MPF00401892, MPF0040187, MPF0040181236, MPF0040187, MPF00401892, MPF0040187, MPF00401802, MPF00401804, MPF00401802, MPF004018010, MPF00401802,		MPF00346351	MPF00345101	MPF00264342 y MPF00336645	MPF00291599, MPF00386021, MPF00390093, MPF00390805, MPF00394206 (2 Imputados) y MPF00397105	MPF00282089	MPE00301062



"2020. Año del General Manuel Belgrano"

562	Sesame Demo	MPF00337071 y MPF00412387
2	Presunto Delito	MPF00337671 y MPF00412387
10	Ley 23.737 Art. 5 inc. c)	MPF00265007 (2 imputados), MPF00310715 (2 imputados), MPF00315781, MPF00319614, MPF00333394, MPF00357192, MPF00367592, MPF00342085, MPF00377381 y MPF00397803
		MPF00394501, MPF00395394, MPF00396293, MPF00396213, MPF003962626, MPF00397687, MPF00398743 (3 MPF00396767, MPF00398596, MPF00396295, MPF003996279, MPF00398779, MPF00398779, MPF00398779, MPF00398779, MPF00406398779, MPF00406907, MPF00400507, MPF00400507, MPF004013079, MPF00406883, MPF00406907, MPF00408997, MPF00409059, MPF0040997, MPF00413079, MPF00413079, MPF00413079, MPF00413079, MPF00413079, MPF004130979, MPF004130979, MPF004130979, MPF00413079, MPF00413079, MPF00413079, MPF00413083, MPF004130979, M
		MPF00374679, MPF00374881, MPF00376725, MPF00378004, MPF00378452, MPF00380761, MPF00380764, MPF00383575, MPF00383575, MPF00387832, MPF00387832, MPF00387832, MPF00387832, MPF00387834, MPF00388901, MPF00390594, MPF00390596, MPF00390599, MPF00390601, MPF00390514, MPF00391400,
		MPF0036608, MPF00358283, MPF00368917, MPF00370510, MPF00370510, MPF00370617 (2 imputados), MPF00371446, MPF00371485, MPF00371583, MPF00371589 (2 imputados), MPF00373441, MPF00374449,
		Imputados), MPF00351567, MPF00354763, MPF00354845, MPF00356877, MPF00357495, MPF00359824,
		MPF00336771, MPF00338850, MPF00339195, MPF00339259, MPF00339890, MPF00342048, MPF00343711, MPF003342648, MPF00351560 (2
		imputados), MPf00327834 MPf00328152, MPf00329200, MPf00330320, MPf00330379, MPf0033863, MPf0033865, MPf0033866, MPf0033868, MPf0033868, MPf00338689, MPf00338865, MPf00338689, MPf00338865, MPf00338689, MPf0033888689, MPf003388889, MPf003388889, MPf003388889, MPf003388889, MPf003388889, MPf0033888889, MPf00338888888888888888888888888888888888
		MPF00315943, MPF00319572, MPF00319588, MPF00319813, MPF00319840, MPF00319887, MPF00322044, MPF00322049, MPF00322049, MPF00322069, MPF00322091, MPF00322203, MPF00322594 (2 imputados), MPF003220011 (2
		MPF00303671 (2 imputados), MPF00303673, MPF00394040, MPF00305171, MPF00305809, MPF00310396, MPF003101162, MPF00311162, MPF0031031031031031031031031031031031031031
		MPF00297050, MPF00298688, MPF00298876 (2 imputados), MPF00300024 (2 imputados), MPF00300254, MPF00300467, MPF00300467, MPF00300496, MPF003004967, MPF003004967, MPF003004967, MPF003004967, MPF003004967, MPF003004967, MPF

El presente informe se elaboró, según registros obrantes en la base de datos del sistema de gestión de expedientes (KIWI) de este Ministerio Público Fiscal. Secretaría de Información Estadística y Análisis de Datos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23días del mes de junio del año 2020.—